

Expediente Tribunal Administrativo del Deporte núm. 238/2017 TAD.

En Madrid, a 9 de junio de 2017, se reúne el Tribunal Administrativo del Deporte para conocer y resolver la solicitud de suspensión cautelar formulada por D. XXX, actuando en nombre y representación de la XXX, respecto de la ejecución de la resolución sancionadora de un partido de suspensión dictada, en fecha 8 de junio de 2017, por el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmatoria de la resolución del Juez de Competición, de 7 de junio de 2017 en relación al Jugador de la plantilla del Club D. XXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

<u>Único</u>.- Con fecha 9 de junio de 2017, se ha recibido en este Tribunal Administrativo del Deporte el recurso interpuesto por D. XXX, actuando en nombre y representación de la XXX, contra la resolución sancionadora de un partido de suspensión dictada, en fecha 8 de junio de 2017, por el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmatoria de la resolución del Juez de Competición, de 7 de junio de 2017, por la que se acuerda suspender por un partido al citado Jugador, por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión, la primera por simular haber sido objeto de falta y la segunda por juego peligroso, con multa accesoria en cuantía de 22,50 euros al club, en aplicación de los artículos 124, 111.1.a), 113.1 y 52.5 del Código Disciplinario de la RFEF.

Tras exponer cuanto tiene por conveniente en defensa de su derecho, el recurrente solicita la adopción de la medida cautelar de suspensión de la ejecución de dicha resolución en tanto se resuelve el recurso interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

<u>Primero</u>.- El Tribunal Administrativo del Deporte es competente para conocer de las solicitudes de suspensión cautelar, con arreglo a lo establecido en el artículo 84.1 a) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y en los artículos 6.2.c) y f) y 52.2 del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina Deportiva, todos ellos en relación con la Disposición Adicional Cuarta. 2 de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.

<u>Segundo</u>.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, las sanciones impuestas a través del correspondiente expediente disciplinario serán inmediatamente ejecutivas sin que las reclamaciones y recursos que procedan contra las mismas paralicen o suspendan su ejecución, todo ello sin





perjuicio de las facultades que corresponden a los órganos disciplinarios de las distintas instancias de adoptar, a instancia de parte, las medidas cautelares que estime oportunas para el aseguramiento de la resolución que, en su día, se adopte.

Tercero.- En el presente caso y en atención a las circunstancias concurrentes, este Tribunal Administrativo del Deporte no aprecia, a la vista de las alegaciones del recurrente y una vez analizada la prueba video gráfica aportada, la concurrencia de la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris), en cuanto a que las alegaciones presentadas no revierten un carácter relevante a los efectos de valorar en estos momentos procesales una posible y efectiva causa de nulidad de pleno derecho. No resulta posible para este Tribunal, en efecto, deducir de las imágenes la existencia de un error manifiesto por parte del árbitro del encuentro y en consecuencia una nulidad evidente o patente que justifique la enervación provisional de los efectos de la resolución recurrida. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en el 30 del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre disciplina deportiva y, por aplicación supletoria, en el Art. 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En su virtud, este Tribunal Administrativo del Deporte ACUERDA

DENEGAR LA SUSPENSION CAUTELAR SOLICITADA

La presente resolución es definitiva en vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Madrid, en el plazo de dos meses desde su notificación.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO